

La victoria siempre incompleta. Perspectivas políticas tras el referéndum constitucional

Íñigo Errejón Galván

Recién finalizado, al momento de escribir este artículo, el recuento electoral del referéndum constitucional del 25 de enero de 2009 en Bolivia, es posible y necesario analizar el escenario político que producen, así como las perspectivas de evolución del proyecto de cambio social en Bolivia.

En este artículo pretendo ubicar el referéndum dentro de un proceso constituyente más amplio, como un momento clave, pero en modo alguno definitivo, de la larga crisis del Estado boliviano. Para ello realizo una breve introducción de la historia política reciente del país.

A continuación, dedico especial atención a un fenómeno a menudo sólo parcialmente comprendido, el del éxito político del regionalismo reaccionario de los departamentos orientales. Sostengo que es uno de los elementos cruciales en el conflicto político actual, y que seguirá determinando la correlación de fuerzas en los escenarios futuros. Considero que de esta manera queda justificado su espacio en el texto.

Por último analizo los resultados del referéndum atendiendo a la nueva geografía política del país que parecen reflejar. En base a este análisis apunto algunos de los que pueden ser los próximos retos del gobierno del Movimiento Al Socialismo, así como las posibilidades de consolidación de lo que en otro sitio llamo la “*hegemonía indígena y popular*” (Errejón, 2008), y en consecuencia del avance del proceso de emancipación de las clases subalternas en Bolivia.

1.- Un proceso constituyente en una crisis estatal

Con cerca del 62% de los votos, el Sí a la Nueva Constitución Política del Estado es el claro vencedor de la consulta. Una clara mayoría de bolivianas y bolivianos han refrendado un nuevo marco legal y político que expresa ese deseo de “refundación del Estado” que presidió el intenso, agitado y extenso proceso constituyente.

La Asamblea Constituyente fue el mecanismo escogido por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo para transformar sustancialmente el entramado institucional del país, obedeciendo a una reclamación planteada por primera vez por los pueblos indígenas del Oriente del país en 1990 y generalizada como consigna rupturista con el orden neoliberal después de las insurrecciones del año 2000 al 2003. La Asamblea, por tanto, debía levantar un orden jurídico nuevo, expresión de la nueva correlación de fuerzas al interior de la sociedad boliviana, ahora claramen-

te favorable al “bloque indígena y popular”: una alianza múltiple y heterogénea de movimientos sociales urbanos, sindicatos campesinos indígenas, organizaciones gremiales y organismos locales de poder de las clases subalternas, que durante el llamado “ciclo rebelde” hicieron finalmente inviable el modelo neoliberal, y con él impugnaron todo el Estado republicano y colonial. *La Agenda de Octubre* fue el programa político elaborado por los movimientos en la etapa insurreccional, marcando los ejes centrales de un gobierno sostenido en las clases populares: descolonización del Estado y reconocimiento de la plurinacionalidad y pluriculturalidad dentro de la soberanía territorial, nacionalización e industrialización de los hidrocarburos y reforma agraria son aún ahora las cuestiones principales del debate político boliviano. Señal de lo acertado de ese programa de ruptura, pero también de lo largo del proceso, de las dificultades para el avance del mismo.

El proceso constituyente no fue, lógicamente, una mera traslación a las instituciones de la hegemonía conquistada por las multitudes en las calles durante las luchas antineoliberales. Como momento de mayor politicidad, se congregaron todas las fracturas y dolencias históricas de la sociedad boliviana, se agudizaron todas las contradicciones y se vivificaron las oposiciones. De agosto de 2006 a octubre de 2007, casi tres meses más de lo previsto, estuvo sesionando la Asamblea Constituyente, cuyo texto final pudo ser aprobado en Oruro con la ausencia voluntaria de los diputados de la derecha y protegida por cordones de campesinos y mineros.

Finalmente, no obstante, el texto sometido a referéndum el 25 de enero de este año fue el resultado de las negociaciones con la maltrecha oposición nacional, introducidas como modificaciones en hasta 144 artículos por el Congreso. El poder constituido subordinaba así al constituyente en aras de la estabilidad institucional y el acuerdo político con la derecha, y las principales víctimas eran el pluralismo jurídico –la equivalencia legal de los sistemas de justicia liberal-occidental y los de justicia comunitaria– y, de manera decisiva, la reforma agraria, que al ser calificada en el texto final de “irretroactiva” afectaba escasamente al latifundio histórico del oriente, el único realmente existente: tan sólo las haciendas inutilizadas o que usen trabajadores en condiciones de esclavitud podrán ser retomadas por el Estado.

2.- La derecha regionalizada

La derecha, sin embargo, no entendió que el acuerdo comprometiera su apoyo explícito al nuevo texto constitucional, y se mantuvo prácticamente al margen del referéndum. La oposición real, de hecho, la constituyeron las élites de los departamentos orientales del país, que se negaron siempre a la negociación con el gobierno y que, desde las prefecturas y comités cívicos, lanzaron una agresiva campaña por el voto negativo a la Constitución, en la que acusó la derrota política y el aislamiento en la geopolítica de la región de su insurrección secesionista de septiembre, pero demostró al tiempo su todavía enorme capacidad ideológica y de movilización.

Esta derecha radicada en el Oriente, de extraordinaria capacidad de movilización y desestabilización, le debe sin duda mucho de su fuerza a la ayuda norteamericana y a sus consultores políticos europeos. También a los discursos equidistantes de los gobiernos del norte. Sin embargo, no es una creación apresurada para enfrentar a Evo Morales. Cuando el bloque indígena y popular se muestra como la única alternativa nacional de poder ante la descomposición del Estado neoliberal, las antiguas élites corren a refugiarse, política y físicamente, al Oriente del país. Su elección no es casual: escogen la zona donde el orden social es más sólido e integrado bajo el dominio económico y cultural de la oligarquía.

Las formaciones sociales del Oriente boliviano son el resultado de oleadas de colonización impulsadas por el Estado y, desde el siglo XIX, por el negocio de la goma y el caucho. Los colonizadores esquilmaron a las numerosas y variadas comunidades indígenas amazónicas de la zona, e instituyeron una estructura social de grandes latifundios orientados a la exportación (Soruco, 2006: 118-120)

El Estado nacionalista salido de la revolución de 1952 reorientó cuantiosas plusvalías de la economía minera al estímulo de Santa Cruz en particular y el oriente en general como enclave de monoproducción agrícola, favoreciendo además su conexión con los mercados urbanos del occidente. Tanto las dictaduras desarrollistas como las más orientadas por la ortodoxia económica diseñada en Washington –Hugo Bánzer como el ejemplo más nítido– favorecieron durante el siglo XX este modelo de enclave exportador de productos de bajo valor añadido, que profundizaba en la condición periférica del país (Wallerstein, 1974 (2004) al tiempo que fortalecía económica y políticamente a esa élite dependiente y agregada del capital extranjero.

Para cuando el *ciclo rebelde* resquebraja el régimen neoliberal, las élites orientales, tras casi veinte años de desregulaciones, de estímulos a la inversión privada transnacional como motor de desarrollo económico y de agudización de una especialización subalterna en la división internacional del trabajo (Wallerstein, 1974 (2004), han acumulado un poder estructural suficiente como para oponer firme resistencia al nuevo protagonismo político de los grupos históricamente oprimidos.

Sin embargo, esta resistencia reaccionaria, que tras la llegada de Evo Morales al poder se endurecerá y que tocará techo durante los disturbios de septiembre de 2008, no pasaría de ser una conspiración de minorías económicamente poderosas si no fuese por su capacidad para generar una identidad regional fuertemente, aunque a menudo no explícitamente, politizada. El “cruceñismo” y su ampliación mestiza y panregional, la identidad “camba” ¹ se han configurado como el sentido común generalizado y territorializado de los departamentos orientales del

¹/ De manera interesante y paradójica, Willem Assies (2006) explica cómo el apelativo “camba” era una forma despectiva con la que los patrones se dirigían a sus peones indios en las haciendas para tildarles de “flojos” y poco trabajadores. Eso, por supuesto, fue antes de que el cruceñismo reaccionario recuperase el término para extenderse territorial y sectorialmente, ahora como identidad regional mestiza, siempre funcional a las élites.

país, un “*sentido de lugar*” (Agnew, 1987) conservador, clientelar y racista. Pero estos discursos espaciales poco tienen de neutrales, por cuanto postulan un Oriente sin fisuras a su interior, ni de clase ni étnicas. Un Oriente armónico bajo la dirección de sus élites, abierto al progreso y a la prosperidad del mercado. Un Oriente que es el reflejo especular del “Occidente” que se representa como indígena, comunitarista y cerrado sobre sí mismo, rural, subdesarrollado.

El neoliberalismo destruyó un tipo de relación entre la sociedad civil y el Estado que nació con la Revolución Nacional de 1952 y que perduró, combinada con grandes dosis de paternalismo y siempre represión, durante casi todo el siglo XX hasta 1985. Esta relación estaba marcada por el salario y el horizonte de modernización industrial, la pertenencia sindical, y las estructuras simbólicas de la clase obrera y el nacionalismo como referentes culturales para el conjunto de las clases populares (García Linera, 2006).

Allí donde las estructuras sindicales y comunitarias construyeron mimbres sociales robustos por fuera de las lógicas estatales y mercantiles, como en el altiplano, en los barrios populares de las grandes ciudades y en el valle cochabambino /2, los huecos de la regulación social no cubiertos por el Estado neoliberal progresivamente en crisis fueron rellenados por formas de autoorganización popular. Éstos han sido los espacios privilegiados de despliegue del poder constituyente, y los feudos del proceso de cambio.

En el ámbito rural del Oriente, el poco peso demográfico de los indígenas originarios de tierras bajas, y la fuerza de la economía agroexportadora y sus relaciones sociales características así como, en las ciudades, el peso de las redes clientelares establecidas por la burguesía compradora y financiera, facilitaron y facilitan una férrea dominación política de la oligarquía sobre las clases subalternas. Desde estos espacios nació la verdadera oposición al proceso constituyente, y se contesta hoy con más fuerza al Gobierno del MAS.

3.- El referéndum constitucional y la geografía cambiante del conflicto político en Bolivia

Con un 61,5% de aprobación en el referéndum, resulta evidente la magnitud del apoyo popular al proyecto de refundación estatal emprendido por el MAS. Pero los resultados dibujan también una compleja geografía política del país, y un escenario de conflicto que no queda ni mucho menos resuelto a favor del gobierno por la reciente victoria electoral.

La distribución del voto en el referéndum constitucional siguió al menos tres fracturas principales: la de clase, la regional y la de campo/ciudad. De esta manera, la mayoría social a favor del proceso de cambio es rotunda, pero se advierten

2/ Seguramente esto sucedió en estas zonas por la estructura de propiedad de la tierra, organizada en cooperativas sindicales de pequeños propietarios, por el peso histórico acumulado de las narrativas obreras, principalmente mineras, o por la pervivencia y actualización de las formas organizativas y culturales de los pueblos originarios, aymaras y quechuas. Pero una explicación de estas diferencias merecería, al menos, un artículo en sí mismo.

algunos signos de una cierta erosión de la hegemonía indígena y popular articulada en torno al Movimiento Al Socialismo.

Prácticamente todos los análisis de los medios de comunicación han coincidido en señalar la división del voto en el Occidente favorable a la nueva Constitución y al Gobierno, y el Oriente opositor. Ésta es una foto fija y excesivamente simplificada de la realidad, que además reproduce el discurso espacial puesto en circulación por las élites orientales que acabo de analizar: sitúa el conflicto social en parámetros regionales, en los que las élites han elegido librar la lucha por su supervivencia como clase dominante. Detrás de todos los discursos descentralizadores se asoman, siempre y en cada negociación o momento de tensión, la defensa del latifundio, la disputa por las regalías del petróleo y el gas, y la involución en materia de derechos sociales y de participación política.

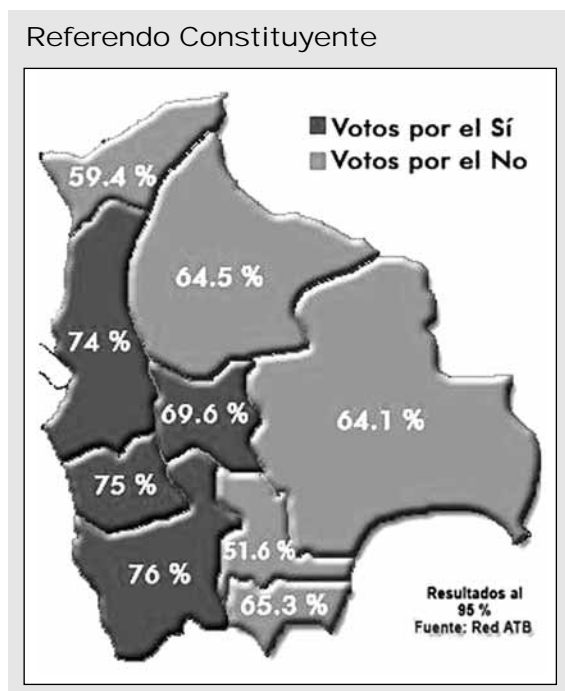
Esta fractura, la regional, es de extrema importancia en el mapa político boliviano. El recorrido de las narrativas que la alimentan no puede ser menospreciado, por su alcance político y porque el proceso de transformación lo es también de la estructura territorial del estado y por la descolonización de su matriz racial y cultural, por tanto directamente relacionada con esta quiebra.

No obstante, hay al menos dos fracturas que los analistas no suelen resaltar.

La fractura de clase, fundamentalmente al interior de las ciudades, parece evidente casi a primera vista sobre los actores políticos enfrentados y su base social: pese a la complejidad del proceso político boliviano, si hay un antagonismo que

lo marca de forma axial, ése es el que enfrenta de manera brutal y desnuda a ricos contra pobres.

Los departamentos mineros y campesinos forman un bloque sólido y masivo de apoyo al Gobierno y a las transformaciones políticas. Frente a él, los departamentos ganaderos, comerciales-financieros y del agronegocio son los bastiones de la oposición. Ésta es otra forma de entender y atravesar el “conflicto regional”. Pero la fractura de clase también opera de forma transversal al interior de las regiones, con particular nitidez en las grandes ciudades.



Esto es evidente cuando se comprueba la diferencia en el sentido mayoritario del voto, en el pasado referéndum, de las clases medias del centro de La Paz por un lado, y la población de las barriadas periféricas y de la ciudad popular, aymara y precaria de El Alto, por otro. También comparando el abrumador voto favorable a la Constitución del barrio popular “Tres mil viviendas” de Santa Cruz frente al mayoritario apoyo al No en los anillos céntricos y de mayor renta per cápita de la ciudad.

La última fractura, incomprensiblemente relegada, en las lecturas del nuevo mapa político, a segundo plano cuando no desapercibida, es la que distingue entre el voto rural y el urbano. El gobierno, y en este caso el texto constitucional, cosechan apoyos siempre superiores al 75% en el ámbito rural del altiplano y los valles, y obtiene o roza la mayoría en el campo de los departamentos sur del país. En Santa Cruz o Beni, donde más fuerte es la oposición, no baja del 40%.

En las ciudades, en cambio, el balance es muy distinto. En todo el oriente y el sur, los resultados electorales en las urbes son preocupantes para el Gobierno; en Chuquisaca, antiguamente decantada por el MAS, el peso de la ciudad frente al campo entrega significativamente ajustadas victorias a la oposición a la Constitución. En La Paz vence el “Sí” con porcentajes aún altos gracias al peso demográfico de El Alto, y en Cochabamba la mayoría está lejos de estar consolidada. Tan solo en las pequeñas ciudades mineras de Oruro y Potosí el voto urbano es nítida y ampliamente favorable al proceso político y, en este caso, a la Nueva Constitución Política del Estado.

Esta división es con toda seguridad la más peligrosa para el avance del proceso de transformaciones estructurales en el país.

El éxito de todas las tentativas emancipatorias de los grupos subalternos ha dependido siempre de su capacidad para tejer alianzas transversales campo-ciudad. Por carecer de ellas cayeron los sublevados de Túpac Katari contra la Corona española. En sentido contrario, por su incapacidad para entenderse con los campesini-



nos indígenas, los mineros y el conjunto del movimiento obrero boliviano fueron, años más tarde, aislados y masacrados en repetidas ocasiones.

El Movimiento Al Socialismo, un “instrumento Político” de los sindicatos cocaleros cochabambinos, pudo superar su marca sectorial y convertirse en el partido de gobierno con una mayoría histórica gracias a que se presentó, en una situación de eventual vacío de poder, asumiendo el programa político de los movimientos sociales, pero también gracias a ser capaz de moverse en el campo de una alianza heterogénea y amplia en términos étnicos y de clase. Evo Morales fue, pese a las desconfianzas, también el candidato de los profesionales empobrecidos y las clases medias mestizas urbanas. Ante el descrédito de la élite política tradicional y la centralidad conquistada por las capas populares e indígenas durante las insurrecciones, el MAS pudo ser el catalizador del bloque social indígena y popular porque supo articular el indianismo con el nacionalismo popular y estatista.

4.- Las amenazas y retos sobre el proceso de cambio

La significativa pérdida de apoyo en las ciudades podría constituir un indicador del agrietamiento del bloque hegemónico hasta el momento, y de que el conflicto político ha agravado las contradicciones internas del difícil proyecto unitario del MAS que pretende combinar nacional-desarrollismo, descolonización y avance de las clases trabajadoras. El gobierno del Movimiento Al Socialismo podrá conducir con más posibilidades de éxito el proceso de transformación política si es capaz de aislar a los sectores más reaccionarios e involucionistas de la oligarquía, integrando a los demás sectores sociales y políticos en forma subordinada en su proyecto de construcción nacional.

De igual manera, la profundización de la división regional será uno de los peores enemigos del proceso político en marcha, al tiempo que el mejor vivero para el rearme material y discursivo de la derecha regionalizada, actualmente la única existente. Dos estrategias complementarias y contempladas ambas por el Gobierno podrían ser particularmente eficaces para cegar esta amenaza: el empleo de las plusvalías del gas para una política de diversificación industrial nacional que rompa la polarización económica regional heredada de la dependencia, y la reforma territorial del Estado que descentralice el poder pero en un sentido de plurinacionalidad y autonomía indígena: que atraviese y desactive la escaleta departamental.

Pese a esta victoria parcial, la correlación de fuerzas en Bolivia sigue augurando un futuro conflictivo entre el bloque indígena y popular y la oligarquía, previsiblemente librado en el terreno del desarrollo legislativo de la nueva Constitución.

El triunfo de las clases subalternas dependerá de su territorialización, de su capacidad hegemónica y del empuje de los movimientos sociales, y estructuras

sindical-comunitarias que ya abrieron este tiempo histórico de esperanza en Bolivia y que hoy siguen empujando a un presidente que dice “mandar obedeciendo”; obedeciendo descolonización, democratización, desarrollo productivo y soberanía, integración latinoamericana contrahegemónica, socialización de la riqueza.

Íñigo Errejón es investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra preparando su Tesis Doctoral sobre el proceso político en Bolivia. ierrejon@cps.ucm.es

Bibliografía:

- Agnew, J. (1987) *Place and Politics*. Boston: Allen and Unwin.
- Assies, W. (2006) “La Media Luna sobre Bolivia: Nación, región, etnia y clase social” en *América Latina Hoy*, nº 43, pp. 87-105
- Errejón, Í. (2008) “La crisis estatal en Bolivia: de la llegada al Gobierno del Movimiento Al Socialismo a los referendos revocatorios” en *Papeles de Trabajo América Latina siglo XXI*. Valencia: CEPS. Disponible en <http://www.ceps.es/publi/Informes/pt2.pdf>
- García Linera, Á. (2006) “Crisis del Estado y Poder Popular” en *New Left Review* (en castellano) nº 7, pp. 66- 77
- Kohl, B. y Farthing, L. (2006) *Impasse in Bolivia. Neoliberal Hegemony & Popular Resistance*. Nueva York: Zed Books.
- Molina, F. “Bolivia: la geografía de un conflicto” en *Nueva Sociedad* nº 218, noviembre-diciembre de 2008.
- Soruco, X. (2008) *Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy*. Santa Cruz: Fundación Tierra.
- Svampa, M. (2008) “Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina” (Ponencia escrita presentada a las *I Jornadas de Análisis Crítico*, celebradas en Bilbao el 14 y 15/11/2008) Disponible en www.maristellavampa.net
- Wallerstein, I. (1974) “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System, *Comparative Studies in Society and History* XVI, 4 Pp. 387-415. ((2004) “El ascenso y futura decadencia del sistema-mundo capitalista: conceptos para un análisis comparado” . En Wallerstein, I. *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo*. Madrid: Akal, cuestiones de antagonismo, pp. 85-114)